



Cerca de un centenar de personas ha secundado la protesta este martes a las puertas del centro base de valoración.

HÉCTOR FUENTES

# Esperas de hasta 18 meses para obtener la valoración del grado de discapacidad

► Cocemfe denuncia que la falta de médicos en el centro base y el hecho de que los trámites se tengan que hacer ahora a través del PROP han dilatado las demoras ► Un centenar de personas protesta por el atasco de expedientes

PINO ALBEROLA

■ El que espera, desespera. Y si no que se lo cuenten a las personas que en la provincia necesitan de una valoración oficial de su grado de discapacidad para poder optar a ayudas, como pueden ser de acceso al empleo, rebajas fiscales, adaptación de viviendas o tarjetas de estacionamiento.

Un trámite que en la provincia de Alicante acumula retrasos de entre 15 y 18 meses. Así lo ha denunciado este martes la asociación Cocemfe con una acción reivindicativa a las puertas del Centro de Valoración y Orientación de la discapacidad de Alicante, conocido como centro base, dependiente de la Conselleria de Igualdad. Unas cien personas han formado una larga cola a las puertas de este servicio, en el que se centralizan las solicitudes procedentes de toda la provincia, para pedir cambios que hagan más ágil el sistema para solicitar la valoración del grado de discapacidad.

Antonio Ruescas, presidente de Cocemfe, recuerda que la propia normativa de la Generalitat establece un tiempo máximo de tres meses para resolver las va-

loraciones, «por lo que ellos mismos incumplen su propia normativa». Además, las demoras se han visto incrementadas en los últimos meses por varios motivos. «Para hacer una valoración del grado de discapacidad es imprescindible la presencia de un médico y, según nos han explicado, tienen problemas para encontrar y mantener a profesionales, porque en cuanto les sale un contrato de trabajo en un hospital se marchan», explica Ruescas.

## Más trámites

También, desde hace unos meses, los trámites para obtener la valoración se tienen que realizar a través del PROP. «Es algo que sólo ocurre en la provincia de Alicante y que supone un trámite más

La valoración es indispensable para acceder a beneficios sociales, ayudas al empleo o a la vivienda

## Reclaman un nuevo baremo por ser obsoleto el actual

► Al margen de pedir que se acorten los tiempos de espera para una valoración, con su acción reivindicativa, Cocemfe exige también que se aplique el nuevo baremo de discapacidad que actualizará el actual que data del año 1999 y que se ha quedado totalmente obsoleto. «El nuevo baremo, además de la parte médica y de rehabilitación, tiene en cuenta también la autonomía de las personas y sus características sociales», explica Ruescas. Aunque el nuevo baremo no es ideal, «es necesario que se ponga en marcha porque incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, como la fatiga o el dolor».

que al final dilata el proceso para obtener la valoración». Además, el hecho de que antes se pudiera hacer los trámites directamente en el centro de valoración «permitía que las personas pudieran venir a preguntar cómo iba su expediente y obtener algo de información, algo que ahora ya no es posible porque se hace todo a través del PROP». En este sentido, Cocemfe reclama más transparencia y que Igualdad habilite números de información para que los afectados puedan saber en qué momento del trámite se encuentra su caso.

## De toda la provincia

En la protesta de este martes han participado personas procedentes de toda la provincia de Alicante. Durante sus intervenciones han denunciado que no recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad a tiempo perjudica a las personas con discapacidad en el empleo, la educación, la accesibilidad, la salud y también les impide acceder a prestaciones que compensan la desigualdad de oportunidades. En los casos más graves, denun-

cian, hay personas que han fallecido antes de tener la resolución y han tenido que estar durante todo ese tiempo de espera sin recibir apoyos en el momento en que más los necesitaban.

En la protesta de este martes estaba Andrés Molina, de la asociación AMFI, que gestiona un centro especial de empleo y se ven afectados de lleno por los retrasos de la administración. «Sin la valoración del grado de discapacidad las personas no pueden trabajar, por lo que al final se pierden oportunidades», señala.

Juan Enrique Sánchez también acudió para reivindicar «que todos tenemos los mismos derechos y, sin embargo, parece que nosotros somos diferentes pese a que hacemos los mismos esfuerzos que el resto».

Entre las afectadas también se encontraba, Raquel Gómez, madre de una pequeña de 19 meses que sufre una enfermedad renal y que lleva un año esperando la valoración «sin que todavía sepamos nada». Con la protesta de este martes, Gómez espera que además se dé visibilidad a la discapacidad orgánica.